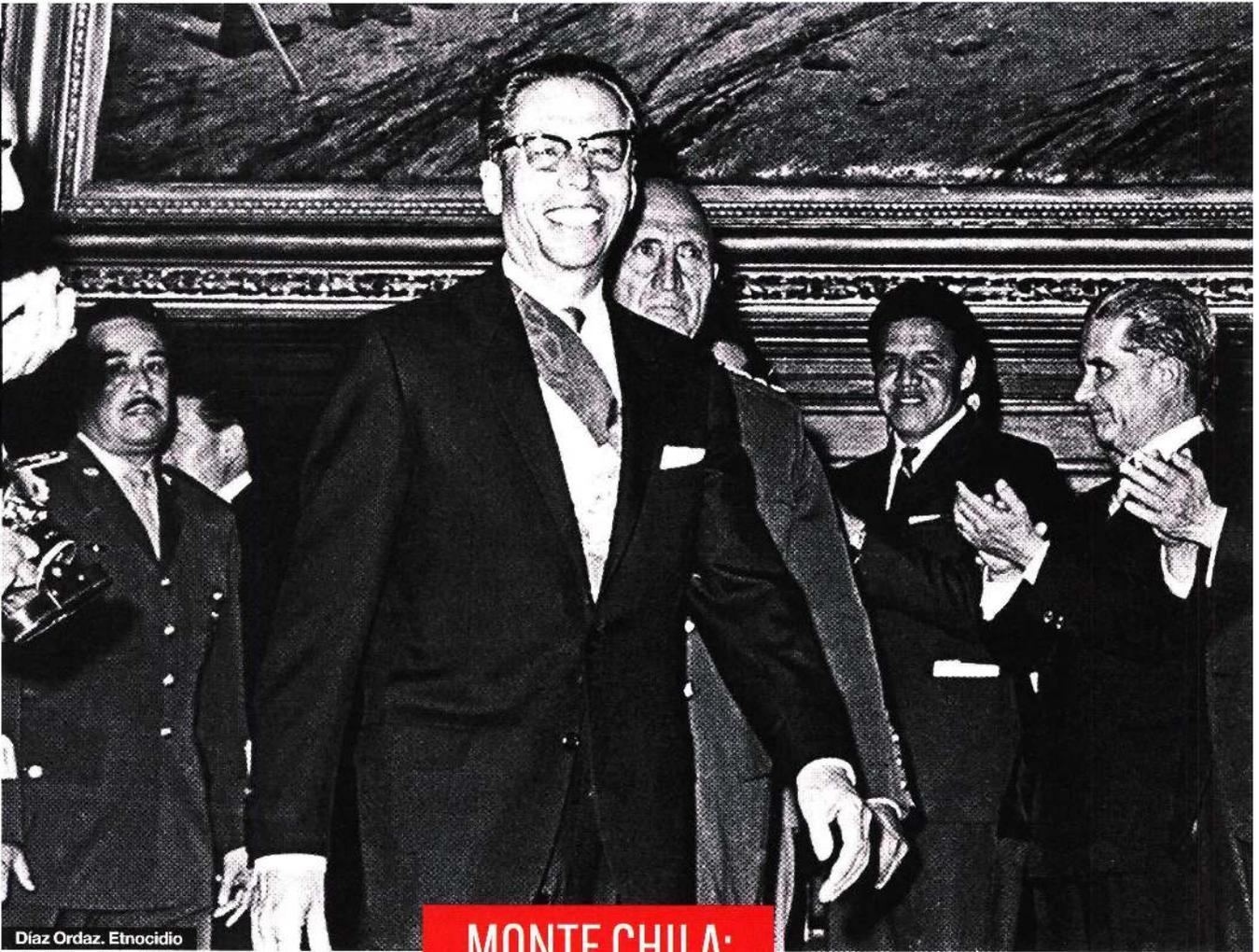


Archivo Proceso



Díaz Ordaz. Etnocidio

MONTE CHILA:

MASACRE E "INMUTABLE SILENCIO"

GABRIELA HERNÁNDEZ

JOLAPA, PUE. Durante tres meses los cadáveres de decenas de indígenas totonacos —ancianos, niñas, niños, mujeres y hombres— quedaron a la intemperie, a merced de la descomposición y de animales carroñeros, en la espesa vegetación de Monte Chila, en la Sierra Norte de Puebla.

Los testimonios coinciden en que cuando los militares permitieron que un sacerdote y un grupo de laicos entraran a Monte Chila a recuperar los cuerpos de

sus familiares y vecinos caídos, sólo hallaron huesos y partes inidentificables, por lo que no les quedó otro remedio que depositarlos en una fosa común.

José, poblador de Jopala, recuerda que cuando era niño acompañó a su padre y a un cura a esta terrible misión, por lo que ubica dónde quedaron enterrados los restos, que corresponderían a 34 o 40 personas.

Pero no eran todas las víctimas. Algunos aseguran que fueron masacradas al menos 80 o 100, otros que 300 y hay quien dice que

500. En ese monte, dicen, se pueden encontrar calaveras y huesos en surcos, veredas, barrancas y árboles. "Monte Chila se convirtió en un cementerio", resumen.

Los lugareños consideran que los soldados, pertenecientes a los batallones 26 y 37 del Ejército Mexicano, dejaron los cuerpos expuestos, prohibiendo darles sepultura, como una forma de escarmiento, para sembrar el terror en esta región.

Lograron su propósito, pues a 53 años de esos hechos aún persiste el "temor



DERECHOS HUMANOS

El 28 de enero de 1970 -el último año de gobierno de Gustavo Díaz Ordaz- una nutrida fuerza militar atacó a indígenas totonacos en la comunidad serrana de Monte Chila. La versión oficial fue que ahí anidaba una banda de forajidos; los testimonios de los pobladores actuales y narraciones históricas coinciden que se trató de una masacre. Ahora defensores de los derechos humanos y habitantes del lugar exigen justicia y reparación del daño para las familias de las víctimas.

a represalias” por hablar de lo ocurrido esa madrugada del 28 de enero de 1970, el último año de la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz -poblano, por cierto-, y se cumplía el primero del gobierno de Rafael Moreno Valle, médico militar, abuelo del fallecido panista del mismo nombre que igual fue gobernador de Puebla.

Gerardo Pérez Muñoz, impulsor y coorganizador del primer acto conmemorativo que se realiza en Puebla sobre esos hechos, afirma que la matanza de Monte Chila fue un etnocidio que tuvo como fondo el despojo de tierras a indígenas y campesinos, donde jugaron un papel fundamental los caciques locales y regionales, así como sus redes con el poder político y económico.

No debe pasarse por alto, señala, que años después de esta sangrienta represión, justo en esas tierras localizadas en los límites con Veracruz, se erigió una hacienda llamada Oro Verde, productora de café, que quedó en manos de alemanes.

La versión que corre entre los pobladores es que directivos de la Volkswagen, entonces recién instalada en Puebla (1964), y el general y entonces gobernador Moreno Valle estuvieron involucrados en la compra posterior de ese fértil monte, que se extiende en forma de meseta a lo largo de más de 10 kilómetros y tiene a un costado el río Necaxa.

Desde antes de la llegada de los españoles, Jolapa estaba poblada por grupos totonacos y nahuas. A la fecha se hablan cinco lenguas indígenas, en particular el totonaco. Pérez Muñoz refiere que la localidad está inserta en una región dominada por cacicazgos, lo cual explica el temor que ha persistido entre sus po-

bladores a hablar sobre esta masacre que se ha mantenido “acallada e impune”.

El pasado 28 de enero, al cumplirse 53 años, el activista llamó la atención sobre este hecho en el foro de discusión para la Ley de la Memoria, organizado por la Comisión para el Acceso a la Verdad, el esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves de Derechos Humanos cometidos en 1965-1990.

Los integrantes de esa comisión reconocieron que no tenían registrados los sucesos de Monte Chila, inmersos en la “histeria anticomunista” que privó en el país durante los sesenta y setenta y la cual tuvo sus particularidades en Puebla.

Cabe recordar que previo a esta matanza en Jopala, el 14 de septiembre de 1968, trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla fueron linchados en San Miguel Canoa, junta auxiliar de Puebla capital.

El 29 de enero, un grupo de colectivos y activistas, de los cuales Pérez Muñoz forma parte, realizaron por primera vez un foro en la localidad de Patla, en Jopala -a unas seis horas de la ciudad de Puebla por carretera- en el que se exigió que se investigue lo ocurrido en Monte Chila y se juzgue y sancione, *post mortem*, a los autores materiales e intelectuales de ese crimen, así como a los funcionarios omisos y cómplices.

Durante este evento Guillermo Garrido, rector de la Universidad Intercultural de Puebla, mencionó que lo ocurrido en Monte Chila constituye la segunda mayor masacre ocurrida en territorio poblano, después de la matanza de cholultecas de 1519.

Exterminio indígena

En su tesis para obtener la maestría en historia de la BUAP -única investigación que se conoce a la fecha sobre los hechos-, Itzel Adelita Olivo Vázquez expone que las causas de la matanza pudieron ser diversas: la toma de tierras por un grupo de agraristas pertenecientes a la Central Campesina Independiente (CCI), una fuga de reos, delincuencia, asesinatos de arrieros y el homicidio de un general o un teniente.

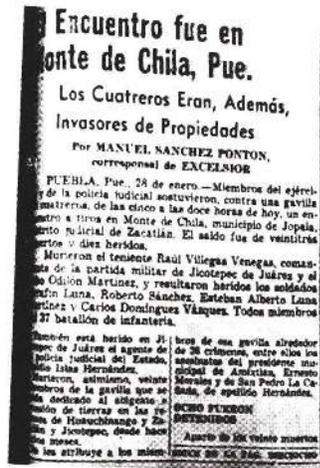
Pero advierte que el resultado del operativo militar, iniciado la madrugada del 28 de enero de 1970, fue el mismo: la desaparición o exterminio de una localidad conocida como Monte de Chila o Santa María Chila, a causa de la matanza y de la persecución de sus habitantes.

Según su investigación, unos 10 años atrás líderes de la CCI habían invadido las verdes tierras de Monte Chila, repartiendo o rentando las áreas a indígenas y campesinos de las localidades aledañas, incluso de Veracruz, como Filomeno Mata.

Los entrevistados señalan que Monte Chila ya estaba poblada por unas 500 personas que habían establecido ahí sus potreros y sembraban maíz, frijol y café. En su mayoría habitaban chozas y habían construido ya una iglesia con una gran campana.

La información recabada por Olivo Vázquez en la tesis presentada en 2020 bajo el título *Y por la tierra, la vida. Monte Chila y el inmutable silencio*, señala que entre 300 y 500 soldados rodearon por diversos frentes ese asentamiento de agraristas y que la balacera, iniciada alrededor de las cuatro de la madrugada, se extendió entre cinco y seis horas. ▶

Capítulo II
1. Nota periodística de Manuel Sánchez Pontón



Manuel Sánchez Pontón. "Un combate entre soldados rebeldes y una guirilla de agraristas". *Excelsior*, 28 de enero de 1970.

La versión oficial



Los testigos indican que se utilizó artillería pesada, avionetas de la Fuerza Aérea Mexicana, elementos de la caballería, en un despliegue “nunca antes visto” en la Sierra Norte de Puebla.

Los relatos dicen que desde el aire se disparó con morteros contra la población civil y que los soldados prendieron fuego a chozas donde había familias enteras, con abuelos e hijos.

Entre los 16 testimonios recabados por la académica está el del sacerdote Gustavo Rodríguez Zárate, quien llegó a la zona en esos tiempos y pudo hablar con los pobladores y clérigos para obtener el dato de que en Monte Chila fueron aniquiladas 322 personas.

“Habían quemado las chozas que tenían en el campamento, todas las quemaron, porque fue cuando quemaron a los niños que estaban adentro”, contó Rodríguez Zárate.

Luego de eso, tropas de Puebla, Veracruz e Hidalgo se asentaron en la región hasta el mes de abril, tiempo en el que emprendieron una cacería contra los que habían logrado escapar, logrando así la dispersión de muchos de los lugareños, que en esos años despoblaron varias localidades cercanas.

Olivo Vázquez hace ver que para desenmarañar lo ocurrido en Monte Chila se enfrentó a la ausencia u ocultamiento de archivos. No encontró registro de esos hechos en el Congreso del Estado, en los archivos General Agrario, en el General del Estado de Puebla ni en el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Igual, los párrocos de pueblos vecinos, como Buenos Aires, Jopala y Bienvenido, se abstuvieron de hacer anotaciones sobre lo sucedido en enero de 1970.

En la hemeroteca Juan Nepomuceno Troncoso de Puebla encontró que ediciones de periódicos de esas fechas fueron arrancadas. No obstante, en la tesis se da

cuenta de la versión oficial de estos hechos, que se publicó en medios locales y en algunos nacionales, como *Excelsior* y *El Heraldo de México*, donde se asegura que el operativo del Ejército fue para exterminar a una “banda de facinerosos” que operaba en esa región, a la cual se le atribuía el asesinato de unas 26 personas en los últimos dos meses.

El 29 de enero de 1970 *El Heraldo de México* tituló su nota “Sangriento encuentro entre gavilleros y fuerzas federales en Puebla: 22 muertos”. Según esa información, los fallecidos, detenidos y perseguidos eran reos que se fugaron de la cárcel de Xicotepec meses antes, además de que en la refriega habían muerto tres militares.

Sólo una nota firmada por el periodista Manuel Sánchez Pontón ponía en duda la identidad de los supuestos “forajidos”, pues reproduce declaraciones del comandante

de la policía de Xicotepec de Juárez, Cirio Villanueva, quien revela que los “perseguidos” son miembros de la CCI, pues a la mayoría de los reos fugados en esa localidad los habían reaprehendidos para entonces.

El cura de Chicontla, Gabriel Diego, es el único que deja un testimonio escrito en el libro parroquial: “El 28 de enero llegó aquí el Ejército Mexicano trayendo innumerables carros y toda clase de armas para ir a apaciguar una trifulca que se había armado en el Monte de Chila el 24 de este mismo mes”.

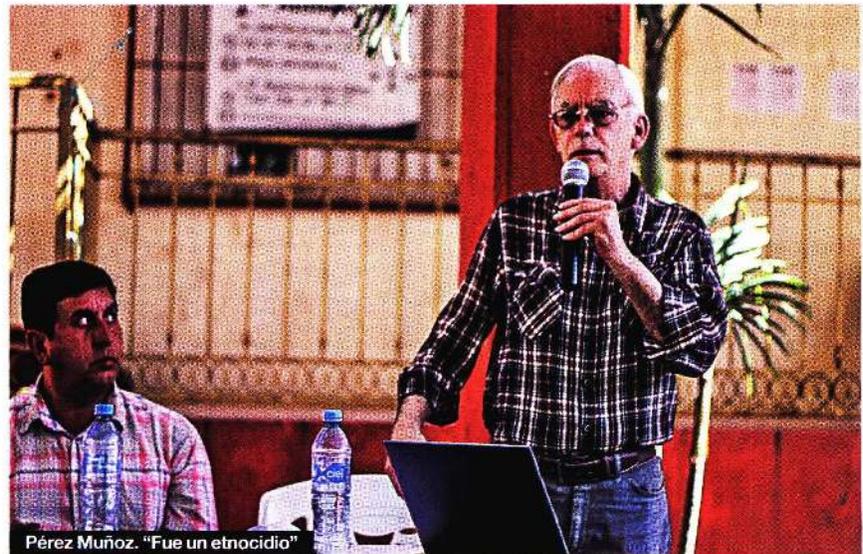
El clérigo da cuenta de que días antes se habían cometido asesinatos de arrieros en esa rancharía, “cosa que era insoponible, pues ya nadie se atrevía a pasar por temor a que lo mataran”.

Aunque menciona que se presumía que reos fugados se habían refugiado en Monte Chila, Diego aclara que las personas en ese lugar eran “... la mayor parte indígenas que en busca de tierras se habían establecido apropiándose grandes extensiones de tierras de los ganaderos de Bienvenido, Jopala y Buenos Aires”.

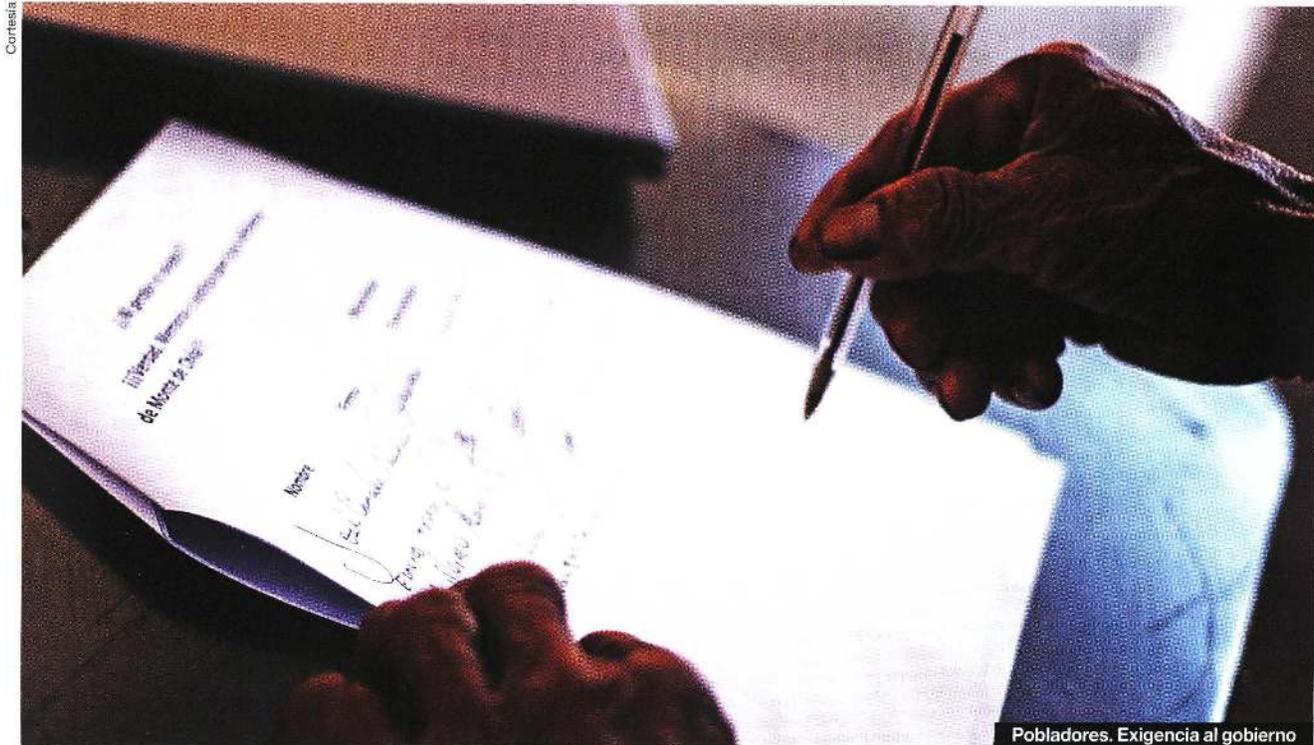
Refiere que “la gente pacífica” se había quejado ante las autoridades, las cuales mandaron a un pelotón de soldados, al frente del cual estaba un teniente “muy estimado” en Villa Juárez (Xicotepec).

El cura cuenta que, cuando los militares llegaron a Monte Chila para capturar a los gavilleros, fueron recibidos a balazos, matando al teniente y otro cabo e hiriendo a dos soldados.

“El 28 de enero bajó el Ejército con varios generales, aquí estuvieron planeando su ataque para vengar la sangre de sus hermanos”, relata el sacerdote, aunque advierte que “la mayor parte de los rebeldes huyeron pues tuvieron conocimiento, por medio de espías, de que había llegado el Ejército”.



DERECHOS HUMANOS



Pobladores. Exigencia al gobierno

En esa relatoría el sacerdote menciona que los militares “no se sabe cuántos fueron a matar todavía más, dicen que cerca de 80; los rebeldes fueron sitiados por tierra y aire”.

Los testimonios que recoge Olivo Vázquez coinciden con esta versión, pues apuntan que la represión ocurrió después de que un militar fue asesinado, pero advierten que los líderes del movimiento agrarista y los supuestos delincuentes ya se habían fugado.

Los pobladores consideran que esta coyuntura fue aprovechada para dar un escarmiento a los agraristas, que en ese tiempo promovían invasiones de tierras sin producir en Puebla y otras entidades del país, y también para que los caciques de la región recuperaran ese fértil monte propicio para la siembra de café que después venderían a otros. También hay quien sostiene que Monte Chila, como asentamiento prehispánico, era reclamado por los totonacos.

“...Como hervidera... ahí dejaron todos los muertos, en los encinos ahí aventaron hartos, en el voladero ahí aventaron. Aparte, para allá, en el crucero nuevo, también. El padre de Bienvenido solo alcanzó a sepultar a unos”, recuerda el poblador Alfonso Rodríguez en su testimonio, reproducido en la tesis de Oliva.

Una habitante de Xicotepéc cuenta a Proceso que ella tenía 14 años y estudiaba la carrera técnica de secretaria cuan-

do a ella y sus compañeras los soldados les dictaron los nombres de las personas muertas para que los transcribieran a máquina. A la fecha se desconoce dónde quedaron esas listas.

En pocas horas los elementos del Ejército Mexicano devastaron la ranchería ubicada en Monte Chila, incluso derribaron el templo, cuya enorme campana, dicen, aún está ahí semienterrada. Las leyendas sobre los gritos de los vecinos y de la campana, que aún se oye repicar, persisten en esta región desde entonces.

“Gente inocente murió y nadie dijo nada”, resumió en su testimonio el cura Rodríguez Zárate, defensor de derechos humanos, quien falleció en Puebla el 24 de junio de 2021.

Memoria y justicia

El 15 de febrero de 1969, a 15 días de haber tomado posesión, el general Moreno Valle ya había mostrado la “mano dura” de su gobierno, pues se le atribuye haber ordenado el asesinato de 18 campesinos de Huehuetlán el Chico, en la Mixteca poblana, que protestaban contra un alcalde.

En el acto conmemorativo, realizado el 29 de enero en Patla, Abel Barrera, fundador del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan y miembro de la Comisión de la Verdad de la Guerra Sucia 1965-1990, convocó a los pobladores para que en marzo acudan a Los Pinos a presentar el caso de

la matanza de Monte de Chila y otras ocurridos en Puebla.

También quienes en ese tiempo eran niños recuerdan que cuando el Ejército aterrizó estas tierras y los pueblos cercanos, tenían ser los siguientes en ser exterminados.

En Patla, los pobladores y activistas que asistieron al foro firmaron un documento dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, al gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina y al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, entre otros, titulado *Propuesta sobre justicia y reparación del daño al pueblo totonaco de Monte de Chila*.

En éste piden que se abran los archivos de las dependencias e instituciones involucradas en la matanza, en especial de la Sedena. También, medidas para garantizar la reparación del daño causado a las comunidades y elaborar un plan para la no repetición.

Al gobernador le reclaman la creación de una Fiscalía Especial sobre Crímenes Políticos y Sociales cometidos contra líderes y movimientos sociales en Puebla.

Los pobladores solicitan honrar a sus muertos –familiares y amigos– mediante un memorial con sus nombres y que, con la participación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, se inicien “lo más pronto posible trabajos de localización de la o las fosas comunes y les den una digna sepultura a las víctimas de la masacre”. ●

